

La Transición a la democracia: una suma de limitaciones

The Transition to Democracy: A Sum of Limitations

Xosé M. Núñez Seixas

Universidade de Santiago de Compostela

¿Qué relevancia consideras que tuvo el protagonismo de Franco en los últimos años de la dictadura y qué importancia cabe atribuir a su muerte en el final del régimen y el comienzo de la Transición?

Hasta que Franco no es desconectado de la máquina que lo mantenía con vida, el régimen no comienza a derrumbarse de hecho. Los reformistas y la oposición democrática estaban a la espera del *hecho biológico*, que sabían inevitable; los síntomas de descomposición de la dictadura eran palpables, y todos intuían que nada sería igual después de la muerte del dictador. Pero, aunque el deterioro físico de Franco era evidente desde principios de la década de 1970, sólo se aceleró desde el verano de 1974. Hasta entonces, su impronta era evidente en las últimas decisiones del régimen: la falta de clemencia hacia los fusilados de septiembre de 1975, su última intervención en la Plaza de Oriente semanas antes de morir donde insistía en los viejos argumentos de la conspiración exterior del comunismo y la masonería contra España... Aunque le faltaba desde diciembre de 1973 Luis Carrero Blanco, su gran asesor áulico, la impronta de Franco en la radicalización represiva terminal del régimen es innegable.

¿Qué factores (sociales, económicos, políticos, culturales) crees que resultaron fundamentales en el final del franquismo y en el proceso de cambio posterior? ¿Qué función desempeñaron el movimiento obrero y los demás movimientos sociales? ¿Qué papel tuvo la «cuestión nacional»?

La transición a la democracia y la solución final (una monarquía constitucional) fue, en mi opinión, un acuerdo implícito y obligado, no planeado desde un principio, sino que fue improvisado sobre la marcha, en cuanto los principales actores involucrados —reformistas del franquismo y oposición democrática— se dieron cuenta de sus limitaciones. Los reformistas tenían el poder, pero no legitimidad; los demócratas tenían la legitimidad, pero no el poder. En 1975-76 la oposición, los movimientos sociales (obrero, vecinal, etc.) y los nacionalismos periféricos carecían de la fuerza suficiente para doblegar al régimen por sí solos: en muy poco tiempo, por ejemplo, los proyectos de huelga general revolucionaria etc., pasan a mejor vida. Sólo podían aspirar a ello en áreas concretas (Barcelona y área metropolitana, partes del País Vasco, ciudades concretas como Vigo o Cartagena, periferia de Madrid...), pero no en el con-

junto de España.

Por su lado, el aparato postfranquista no pudo imponer la agenda inicial, una monarquía pseudoconstitucional con libertades y pluralismo político limitado, tímida descentralización administrativa y poco más. Se mantiene el campo de juego que se dicta desde arriba, sobre todo desde el referéndum de la Ley de Reforma Democrática de diciembre de 1976: monarquía constitucional. Pero las normas del juego inicialmente previstas por el reformismo postfranquista se amplían considerablemente gracias a la movilización ciudadana y la fuerza que la izquierda y algunos nacionalismos periféricos muestran en junio de 1977: Estado de las Autonomías, legalización a medio plazo de todos los partidos políticos, renuncia a una solución militarizada del terrorismo de ETA, etcétera.

En lo referente a la cuestión nacional, los reformistas del franquismo no podían ni imaginar en 1976 que España se convertiría dos décadas después en uno de los Estados más descentralizados del mundo, y que la Constitución de 1978 reconocería la existencia de «nacionalidades y regiones» en su seno (pese a afirmar repetidamente también que España es la única nación). No era la autodeterminación ni el federalismo plurinacional que defendían los nacionalistas periféricos y parte de la izquierda, pero era bastante más de lo que los más realistas podían imaginar. La cuestión nacional fue en este sentido una de las piedras de toque de la profundidad de la transformación del Estado; y también constituyó desde un principio uno de los aspectos más conflictivos de la transición, en particular el terrorismo de ETA y su estrategia de golpear al ejército para provocar un golpe de Estado. En ese sentido, con los matices que se quieran y con la excepción del nacionalismo radical vasco y partes del gallego y catalán, lo cierto es que los sectores mayoritarios de los na-

cionalismos subestatales optaron por una estrategia pragmática, aceptaron el autogobierno y otorgaron prioridad a recuperar la democracia, las libertades individuales, sobre la definición territorial de la soberanía.

¿Consideras que la salida que resultó triunfante en el proceso de cambio postdictatorial era la única posible o existían factores que hubieran podido conducir a otras alternativas?

La historia contrafactual es siempre un ejercicio intelectual apasionante, pero en términos históricos resulta dudosamente útil. Es fácil cincuenta años después acusar a la oposición de cobardía o de estrategia acomodaticia. La ruptura democrática era poco factible, dada la correlación de fuerzas. No solamente el posfranquismo dominaba el aparato del Estado, los medios de comunicación y buena parte del empresariado. El contexto internacional no era propicio a una salida rupturista, y el espejo portugués era contraproducente: en septiembre de 1976 se había reconducido el PREC hacia un Estado constitucional, por ejemplo. Las fuerzas armadas eran abiertamente involucionistas, salvo quizá sectores de la oficialidad más joven. La legitimidad política del Gobierno republicano en el exilio no era secundada, en la práctica, por la mayoría de las fuerzas de la oposición democrática, más pegadas al terreno (PSOE, PCE, etc.), y que desde muy pronto descartaron en la práctica la posible restauración de la república (o la instauración de un gobierno provisional que convocase un referéndum sobre la forma de gobierno). Además de todo ello, y como demostraron los resultados electorales de junio de 1977, con todo lo que se les pueda achacar, buena parte de la sociedad española optaba por una solución pactada, dando mayoría a la UCD y al PSOE, mientras que Alianza



Militantes comunistas en Getafe durante la campaña electoral de junio de 1977 (AHCPE).

Popular, los neofranquistas, el PCE y otras opciones de izquierda (estatal o periférica), con matices, obtenían mucho peores resultados. En abril de 1975 algo parecido había sucedido en Portugal, pese a la dinámica social revolucionaria que había inaugurado un año antes la revolución de los claveles.

En mi opinión, el resultado de la transición no fue el peor posible. Ciertamente, los franquistas siguieron en sus puestos en la Policía, las fuerzas armadas, el aparato del Estado, y no hubo nada parecido a una justicia transicional, ni reparativa de las víctimas del franquismo. Pero tengamos en cuenta que esa fue la norma, con matices, en buena parte de Europa tras 1945. Hubo continuidad en las élites sociales y económicas, sin duda, y se mantuvieron áreas de privilegio económico, además de las favorables condiciones que obtuvo la Iglesia Católica en el Concordato de 1979. Pero eso también pasó en otros lugares. La democracia asumió sin discusión el marco

de la monarquía determinado por Franco, sí; pero la monarquía constitucional que realmente se instauró no era la monarquía cesarista y militar imaginada por el dictador y sus asesores. Y el marco de relaciones laborales cambió de manera profunda. Dadas las condiciones de partida, distintas a las de Grecia o Portugal en 1974, el cambio había sido considerable, pero no era rupturista, aunque la extrema derecha y parte de la derecha posfranquista y conservadora interpretase que lo sucedido era una ruptura disfrazada de transición.

¿Cómo juzgas la memoria en torno a la Transición y a qué tiene asociada esa etapa la ciudadanía? ¿Qué mitos perviven en torno al proceso?

El tiempo pasa, y para la gran mayoría del alumnado universitario o de enseñanza media de hoy, la transición son historietas de sus padres y abuelos. En mi opinión, es

hora de historiar la transición, estudiar las alternativas y opciones que tuvieron los protagonistas de aquel tiempo, huyendo de determinismos apriorísticos. La derecha conservadora ha asumido desde la década de 1990 una visión positiva y benigna de la transición, presentándola como un gran logro colectivo que había espantado los fantasmas de guerra civil. Gracias a la transición, España habría reencontrado su lugar en Europa y habría vuelto a una normalidad que, como escribió José M^a Aznar, ponía fin a siglo y medio de excepcionalidad histórica. Y un papel fundamental en esa historia de éxito se atribuía al papel conciliador y arbitral de la monarquía: el rey Juan Carlos I como «piloto del cambio». ¿Quiénes cuestionarían el éxito de la transición? Los impacientes de siempre, izquierda radical con nostalgia republicana e insaciables nacionalismos subestatales. Buena parte de la izquierda también asumió la lectura benigna de la transición democrática, incidiendo en las conquistas arrancadas a los reformistas del franquismo (Estado de las Autonomías, construcción de un Estado del Bienestar a contracorriente desde principios de la década de 1980, cláusulas sociales de la Constitución, pluralismo político pleno, etcétera) y en el rol positivo de las movilizaciones sociales. Desde principios del siglo XXI, se han cuestionado por parte de una nueva izquierda las concesiones de la oposición democrática y se le ha reprochado el abandono de sus programas de máximos de 1975, sobre todo el trágala de pasar por la monarquía y renunciar a la república, reinterpretada ahora como una esperanza de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de profundización de los derechos sociales.

En todos los casos, sobra juicio apriorístico y falta conocimiento, algo que la historiografía sobre el tardofranquismo y la transición está, sin embargo, aportando de modo continuo desde las últimas décadas. Creo sin embargo que hoy en día persisten pocos mitos: uno de los más duraderos e influyentes en su día, el papel arbitral del rey Juan Carlos I, se ha visto erosionado por los propios deméritos del monarca y la crisis de legitimidad de la monarquía desde 2012. Tampoco persiste el mito de Adolfo Suárez como gran estratega de la transición. Quizá el más recurrente es el del milagro económico y la consolidación de una clase media urbana y semiurbana que habría huido tanto de continuismos como de soluciones rupturistas. En el fondo, tenemos aún pocos datos fehacientes acerca de cuáles eran las expectativas reales de amplios segmentos de la población española en 1975-78.

¿Crees que debería procurarse introducir una visión más compleja de esos años en el currículum docente preuniversitario?

Por supuesto, y eso también se aplica al estudio del siglo XX en general, con especial énfasis en la guerra civil de 1936-39 y el régimen franquista. Una asignatura sobre los orígenes remotos y cercanos de la democracia española, cincuenta años después de la muerte de Franco, sería necesaria en el currículum educativo. No por eso van a dejar de difundirse mitos falsos y tergiversaciones interesadas por parte del revisionismo pseudohistórico vinculado a la extrema derecha, que recurre a otras vías de difusión (redes sociales, sobre todo). Pero por algo se ha de empezar.